

B. 1944.1

SALVADOR DE LA PLAZA

La Reforma Agraria:

Elemento Básico de Planificación de la
Economía Nacional

13ª Conferencia del ciclo organizado por
la SOCIEDAD DE ESTUDIOS ECONÓ-
MICOS Y SOCIALES, dictada en la Uni-
versidad Central de Venezuela, el 24 de
Febrero de 1944.

Caracas - Venezuela

El acaparamiento de tierras, el cultivo de plantaciones y su consecuencia, las formas de producción que hemos señalado, determinaron también que imperara en la agricultura el monocultivo, sistema incompleto de producción. La cría y la producción agrícola se realizan en Venezuela divorciadas la una de la otra y hasta contrapuestas. Potreros de ceiba o tierras cultivadas. Se ha querido explicar esta anomalía diciendo que se origina en la conformación geográfica del país: partes altas, serranías con estrechos valles y partes bajas de extensas sabanas. Creemos por el contrario que el origen esté en el régimen de apropiación de la tierra, en el latifundio, como nos lo ha venido a comprobar el hecho de que en los últimos años hayamos asistido a la "invasión" de las tierras altas por el potrero. Para los grandes propietarios de tierra en los Estados Lara, Zulia, Aragua, Carabobo, Miranda, los potreros de ceiba representan más renta que los cultivos, porque la erosión de los llanos y las distancias ilimitadas que tiene que recorrer el ganado, han provocado un aumento de precio de la carne en los mercados de consumo.

El sistema completo de producción, es decir, la coordinación en un mismo fundo o explotación de la cría y la agricultura, sistema que es la base agraria en la mayoría de los países desarrollados, permite una mejor utilización de la tierra por el empleo de la rotación de los cultivos y el aprovechamiento de los abonos naturales. El predominio de explotaciones completas, pequeñas o grandes, no quiere decir la exclusión de extensos fundos dedicados de preferencia bien a la cría o bien a la agricultura. Condiciones de desarrollo social y político, de medio geográfico o de amplios mercados pueden exigirlos.

Pero bajo el régimen latifundista, no podían desarrollarse sistemas de producción en los que se hicieran intervenir ni la técnica ni nuevos factores en la producción —inversión de capitales, maquinarias, etc.— Por el contrario, el

acaparamiento de tierras en pocas manos tenía que convertirse, como se ha convertido, en una traba para el desarrollo mismo del sistema capitalista. Al sumir en la más espantosa miseria a la población campesina, la ha privado de los medios económicos para adquirir los productos industriales de las ciudades, creando al mismo tiempo en el campo condiciones que son un obstáculo para que prosperen las explotaciones intensivas y técnicamente organizadas. Ejemplos recientes, los fracasos de Branger, Ron, etc. en siembras de algodón y de arroz, así lo evidencian, aunque se sugieran otras explicaciones.

Bajo ese régimen sólo pueden pervivir, pero en acelerada decadencia, los sistemas de potreros, de plantaciones y el conuco. El primero que es la negación de la producción de carne para el consumo, el segundo al cual ya nos hemos referido y el conuco, expresión típica del atraso y de la miseria en que vive la población campesina. Tanto económica, como social y demográficamente, el conuco es ruinoso no sólo para la generación de hoy, sino más aún para las venideras. Por causa de esa forma de producción, a la cual el campesino venezolano ha sido condenado, la tierra pierde sus cualidades, la erosión se extiende, la desnutrición de la población campesina alcanza índices inquietantes, los centros poblados van desapareciendo a medida que los campesinos se dispersan en busca de nuevas tierras, de montañas que talar, haciéndose más insolubles los problemas sanitarios y culturales. Los productos alimenticios escasean y los especuladores provocan el aumento de los precios, con la consiguiente alza del costo de la vida que se viene observando con anterioridad al actual conflicto mundial. Pero pronunciarse contra el conuco haciendo abstracción de la causa que lo origina, es querer tapar el sol con una mano para que no alumbre.

Sería un error confundir la producción de "conuco" con la producción de "pequeña explotación". Al conuco lo caracteriza la inestabilidad, lo transitorio. Entre el hombre que lo cultiva y la tierra no se establece ninguna de las rela-

ciones de ambiente que en sí forman la vida campesina. El conuquero, amenazado de desalojo, está abocado en cada momento a abandonar la tierra y escatima, por no ser suya, invertirle los más pequeños esfuerzos. No construye una casa ni siembra árboles frutales ni acondiciona los riegos. Por el contrario, en la "pequeña explotación", en tierra suya, el campesino invertirá todos sus esfuerzos, toda su iniciativa, porque a él mismo beneficiarán. La dedicación a incrementar su producción, contribuirá al desarrollo de la técnica y de la producción agrícola en general. Si el conuco es el vicio más relevante del latifundio, en la "pequeña explotación", puede fincarse un sistema de producción agraria, llenadas ciertas condiciones.

El régimen latifundista es principalmente un obstáculo poderoso para la integración de la nacionalidad venezolana, ya que, como hemos visto, ha provocado la diseminación de la población y ha acentuado las contradicciones entre la población urbana y la rural, entre la ciudad y el campo: confort y bienestar en aquélla, miseria y desolación en éste. La concentración de la población es el elemento básico para el florecimiento de las industrias, de la cultura, para el incremento de la agricultura, el saneamiento del país y por consiguiente, para el crecimiento mismo de la población. Gilberto Loyo ha afirmado con razón que: "el porvenir de la nación está vinculado a su desarrollo demográfico. La economía nacional depende de la cantidad y de la calidad de la potencia humana de trabajo. La potencia humana de trabajo de un país deriva del número de sus habitantes, así como de las cualidades físicas y morales y de la técnica de la población".

Una población diseminada en grandes extensiones de tierra expone al hombre a una lucha desigual con la naturaleza, y lo hace proclive a un retroceso social, económico y político. Es errado juzgar a un país por el aspecto que a primera vista presente su ciudad capital. Si así juzgáramos

al observar a Caracas, concluiríamos en que Venezuela es una nación altamente civilizada. La realidad es otra. El aspecto de Caracas y su confort, existen a costa de una lamentable miseria de la población rural venezolana, es síntoma de una crisis en desarrollo.

El índice de crecimiento de la población es muy bajo, porque el índice de la mortalidad es desgraciadamente muy alto, a tal punto que silencia el de los nacimientos, relativamente apreciable. Ahora bien, para disminuir la mortalidad, conservar y defender la natalidad, se requiere concentrar la actual población. Las campañas sanitarias contra el paludismo, los parásitos intestinales, etc. ni pueden realizarse en todo el país con la intensidad requerida, ni rinden en proporción a sus costos.

La tarea de alfabetización, la difusión de la cultura en todos sus aspectos, no pueden alcanzar sus objetivos ni su eficiencia en una población diseminada. El nivel medio de civilización a que debemos aspirar no podrá obtenerse sino por una potencia demográfica que se traducirá en definitiva en potencia nacional. Poblar las actuales zonas mejor acondicionadas de nuestro país con los nacionales —concentrar la población— es premisa también para la absorción de la inmigración extranjera y para invitar a esa inmigración a que se oriente hacia nuestro país.

En este mismo recinto el doctor Arturo Uslar Pietri llegó a la conclusión de que el problema demográfico de Venezuela estribaba en que las 4/5 partes de nuestra población —2.800.000 habitantes— estaban radicadas en 1/5 parte del territorio —180.000 Km²—, es decir, en la zona norte costera, quedando por lo tanto casi deshabitadas las otras 4/5 partes —720.000 Kms²—. Si éste fuese el problema y si él estuviese desvinculado de la situación agraria, la solución a propiciar sería la de trasladar parte de esa población hacia las zonas centro y sur. Sin embargo, dada la extensión terri-

terior de la zona centro-costera, se observará que habita en ella una población de por sí diseminada, 15 personas por kilómetro cuadrado, no obstante la densidad del Distrito Federal que es de 146 por kilómetro cuadrado. .

Una política demográfica nos debe llevar a hacer concurrir todos los elementos necesarios para proteger y defender al elemento humano de que hoy disponemos; a poblar la parte del territorio que por sus condiciones de clima, de suelo, de vías de comunicación, ha demostrado ser la más aceptable para que esa población, por su propio crecimiento, devenga colonizadora de las otras partes del territorio hoy desiertas.

Anteriormente nos hemos referido a que el desarrollo industrial del país está obstaculizado por la ausencia de un mercado interior. Es de advertir que las industrias que hoy aparecen prósperas, fundan su existencia en medidas de protección arancelaria, las que, por ser tales, deben tomarse como provisionales y no como base de estabilidad. Circunstancias del momento, el actual conflicto mundial y la distribución desordenada de la renta del petróleo, auspician esa política económica, pero a la postre esas industrias devendrán tan parasitarias que degenerarán y perecerán si no se pone en marcha otra orientación.

Se protege, no el desarrollo industrial con vista a los intereses colectivos, sino en beneficio de una reducida minoría que especula a costa del consumidor. Tales las industrias que transforman materias primas importadas sin asociarles materias primas nacionales y emplean un reducido número de obreros. Aún en las industrias que transforman principalmente materias primas nacionales, la especulación recibe el mayor beneficio. Tomemos como ejemplo la textil, por su relación estrecha con la agricultura. Esta industria ha acusado grandes utilidades en los últimos años a base de dos medidas arancelarias proteccionistas: a). — Alto

arancel al algodón importado, para propender al cultivo de esta materia prima en el país (la industria nacional debe consumir materia prima venezolana); b).—Alto arancel a los productos textiles importados, para propender al desarrollo de la industria nacional (los venezolanos deben consumir telas venezolanas). Pero esa doble imposición ha traído como consecuencia tan alto costo de producción y por consiguiente, precio tan elevado de venta, que la población viste menos y peor cada día. Hasta ahora el consumidor no ha sido tomado en cuenta por el Estado; sobre sus hombros ha pesado el enriquecimiento de toda clase de especuladores. Los industriales, ante la amenaza de reducción del consumo y de la pésima calidad del algodón nacional, han solicitado la libre importación de éste, como medio de abaratar los precios, pero se han pronunciado por la permanencia de la protección a sus productos. Los conflictos entre agricultores e industriales y entre éstos y sus obreros, originados en las reducciones de salarios, se agudizarán hasta tanto se pueda transformar una materia prima nacional igual en calidad y precio a la importada y se pueda vender un artículo en el mercado a igual precio del importado que viniera a hacerle competencia. La mayoría de las industrias tienen pues un campo de expansión muy limitado: el consumidor que aún no ha descendido al estado de miseria de la mayoría de la población.

Hemos hecho a grandes rasgos algunas consideraciones sobre la situación nacional, porque creemos que la Reforma Agraria no puede plantearse independientemente, aislada, de los problemas nacionales que confrontamos. Ahora nos referiremos más concretamente a la actual estructura del agro venezolano, sirviéndonos de los datos suministrados por los Censos Agrícola y Pecuario de 1937.

Concretaremos nuestras investigaciones a los Estados Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira y al Distrito Federal, por considerar que ellos in-

tegran una zona más o menos continua geográficamente y por ser su suelo y clima relativamente uniformes. También porque en esa zona habita el 53% de la población total del país —1.855.126—, y ser su extensión territorial 7.683.000 hectáreas o sea el 8½% de la del país. El 47% de la población —1.544.874— habita pues en el 91-½% del territorio, en 82.517.000 hectáreas.

La desproporción entre estas dos densidades de población: 24,15 por Km² y 1,87 por Km², nos indujeron a pensar que las relaciones de producción existentes en los Estados mencionados y, como consecuencia, las relaciones sociales y políticas de su población, podían tomarse como índice aproximado en mucho al estado general del país.

No tenemos cifras de comparación para investigar si esa desproporción existe, desde la Independencia, guardadas las diferencias consecuentes para las diversas épocas. El conquistador debía buscar, por otra parte, los climas más benignos para su adaptación, las zonas más pobladas por indígenas donde encontrar la mano de obra esclava, los brazos para el trabajo de la tierra y de las minas, y las de más fácil acceso al mar. Con las mejores tierras de esas regiones, entregadas en encomiendas a los conquistadores, fué que se crearon los primeros latifundios.

Así encontramos que para 1937, de la extensión territorial de esos Estados —7.683.000 hectáreas— estaban apropiadas 3.284.193 o sea el 42% (fundos agrícolas y pecuarios). Es de advertir que ese porcentaje término medio es inferior al que prevalece en algunos de dichos Estados. Así en Miranda está apropiada el 82% de la tierra, en Aragua el 68%, en Carabobo el 100% y en el Distrito Federal el 80%; lo que no debe extrañarnos dado que los altos picos de las serranías de Trujillo, Mérida y Táchira no podían despertar la codicia de los conquistadores, como tampoco la de los latifundistas de la República.

Para la apropiación de la tierra en sí no tiene mayor importancia. Es su distribución y las extensiones en cultivo, lo que permite sacar conclusiones. Excluyendo a los Estados Lara, Yaracuy y Mérida, de los cuales no se levantó Censo, encontraremos que en los otros Estados nombrados son de propiedad particular 2.341.902 hectáreas, de las cuales 1.829.628 pertenecen a sólo 1.320 propietarios de más de 150 hectáreas, o sea que el 78% de la tierra está acaparada en relación de un propietario de más de 150 hectáreas por cada mil habitantes. Las 512.274 hectáreas restantes por 34.570 propietarios de menos de 150 hectáreas, es decir, que el 22% está acaparado en la relación de 27 propietarios por cada mil habitantes.

La población de esos Estados es de 1.269.810 habitantes, de la cual es rural 687.091, por lo que tendremos que mientras 35.890 habitantes son propietarios de tierra, 651.201 no poseen nada, aceptando que los 35.890 propietarios de fundos vivan en el campo, lo cual no es cierto.

Estas cifras globales, con ser tan concluyentes, se comprenderán mejor si se observa el grado de acaparamiento en cada Estado. Tomemos como ejemplo dos de ellos, uno del centro y otro de la región andina:

Miranda tiene una población de 216.527 habitantes, de la cual es rural 166.920. De las 795.000 hectáreas que tiene de extensión territorial, son de propiedad particular 655.053 hectáreas, el 82-½%, y de ellas 557.516 acaparadas por solamente 406 personas, es decir, que el 85% de la tierra apropiada la acapara el 2 por mil de la población. Las 97.537 hectáreas restantes son de propiedad de 2.879 personas. Por consiguiente, en el Estado Miranda mientras 3.285 propietarios acaparan el 82-½% de la tierra, 163.635 campesinos no poseen nada.

Trujillo: población 242.605, de la cual es rural 183.817. Extensión territorial 740.000 hectáreas; de propiedad privada 141.239, el 20%. Y de éstas están acaparadas 47.391 por

sólo 23 personas, es decir, que el 34% de la tierra apropiada la acapara el uno por diez mil de la población. Las restantes 93.843 hectáreas por 10.434 propietarios. En el Estado Trujillo por consiguiente, mientras 10.457 personas acaparan el 20% de la extensión territorial, 173.360 campesinos no poseen nada.

Observaremos que si en Trujillo hay tres veces más fundos de menos de 150 hectáreas que en Miranda, lo que nos podría hacer pensar en una distribución más equitativa de la tierra, encontramos por otro lado que el acaparamiento es más grande, ya que sólo 23 personas poseen cada una de ellas más tierra que cada una de las 406 de Miranda. Así también, que el número de los campesinos sin tierra es mayor en Trujillo —173.360— que en Miranda —163.635—, no obstante la extensión de tierras no apropiadas. En Miranda predomina el cacao, en Trujillo el café

¿Qué actividad productiva realizan los 651.201 campesinos sin tierra que habitan la Zona que estamos considerando?

Los Censos suministran los datos siguientes: 1.289 tienen arrendados fundos y pagan a los propietarios una renta anual de Bs. 745.053; 21.388 son pisatarios (colonos arrendatarios) y pagan a los propietarios una renta anual de Bs. 1.159.468; 3.737 son medianeros y 16.737 cultivan conucos en tierras de ejidos y baldíos. Todo lo cual hace un total de 43.151 cultivadores.

Por otra parte, durante el año 1936 se pagaron Bs. 57.078.472 en salarios por 16.767.162 jornadas de labor. Como el trabajo en el campo, a diferencia del de las industrias, no es fijo ni constante, y como por otra parte hemos llamado población urbana a la que está concentrada en poblados de más de 1.000 habitantes, pueblos que generalmente proveen de trabajadores a las haciendas vecinas, es imposible

precisar el número de asalariados agrícolas en la población rural. Si supusiéramos un término medio de 130 días de labor por año —lo que es exagerado—, para hombres y mujeres, tendríamos una población de más de 300.000 campesinos sin tierra, sin cultivos en tierra de otro, sin salarios, improductivos nacionalmente. Son las familias que han escapado a las montañas.

Y esta situación se revela más injusta bajo el punto de vista social y más negativa bajo el punto de vista económico en relación a la economía nacional, si observamos que del 1.478.197 hectáreas de la tierra de propiedad privada agrícola, sólo están cultivadas 398.642 hectáreas, el 27%. Es decir, que permanecen ociosas 1.079.555 hectáreas, el 73%. No especifica el Censo la ubicación de las tierras cultivadas, pero no es necesario. Son las mejores y más cercanas a los lugares poblados, comunicadas por transportes a los mercados de consumo.

Hemos advertido anteriormente que el cultivo característico en la forma de apropiación latifundista de la tierra, es el de plantaciones. Los Censos nos revelan que en los Estados a que nos estamos refiriendo, de las 398.642 hectáreas cultivadas, corresponden 37.963 al cacao y 156.573 al café, lo que hace un total de 194.536 hectáreas, o sea el 49%. Por consiguiente, a los otros cultivos —caña, maíz, frutos menores— corresponden 204.106 hectáreas, el 51%. Si relacionamos esas cifras con el valor de la venta de la producción total agrícola, según los mismos Censos, podríamos sacar algunas conclusiones interesantes. En el año de 1936-37 el valor de venta de la producción total fué de Bs. 98.953.043, correspondiendo al café Bs. 22.542.655 y al cacao Bs. 8.202.149, o sea entre los dos Bs. 30.744.834, el 31%. A los otros cultivos Bs. 67.813.209, el 69%.

La producción por hectárea en los cultivos de café y cacao fué de Bs. 157,57 y en los otros cultivos de Bs. 332,24.

El presente trabajo, original de Salvador de la Plaza, es uno de los más documentados y serios que sobre materia agraria se han escrito en Venezuela.

Como verá el lector, de la Plaza, partiendo de un análisis objetivo de nuestra realidad agraria, cuyas raíces remontan a la época colonial. Llega en su conferencia a conclusiones prácticas profundamente venezolanas.

Así había de ser. Porque Salvador de la Plaza es un veterano del estudio, de la disciplina científica, de la investigación económica. Los mejores años de su vida los ha dedicado y los dedica a la lucha por el progreso de su tierra.

Para serviría ha redactado este estudio sobre nuestro problema agrario. Un problema vinculado a todos los otros que el país enfrenta, pues es bien claro, para quien haya meditado sobre la cuestión agraria venezolana, que su solución es indispensable para que el país se enrumbe, firme el paso, hacia la superación de un estado de cosas que avasalla el ascenso histórico de la República.

Los datos aportados por Salvador de la Plaza, logrados después de paciente búsqueda en documentos oficiales, constituyen un valioso aporte de recio mérito probatorio. Son ellos, esas cifras claras, los que están diciendo con maciza precisión cuán urgente es la reforma agraria entre nosotros para poder incorporar al campesinado, —abrumadora mayoría de la población nacional—, al proceso de la producción, a toda la vida cultural de Venezuela. Demuestran sin dudas que es imperioso modificar la estructura agraria semi-feudal que padecemos para que dé todos su frutos el esfuerzo de dignificación en que está empeñado el Gobierno del Presidente Medina.

Por eso es que la reforma agraria es una reivindicación nacional. En su realización están interesados no sólo la masa miserable y hambreada e inculta que constituye el campesinado venezolano, sino todos aquellos que de veras aman la patria y anhelan un porvenir más justo, más humano, más digno. Quienes descan que la

La producción de café por hectárea Bs. 144,00 y la de cacao Bs. 216,05.

No vamos a comparar esos índices con los de otras regiones del país o del extranjero. Tampoco vamos a afirmar que los cultivos varios den mayor rendimiento, de acuerdo con esas cifras, que el café o el cacao, pues no tenemos los costos de producción. Sin embargo, sí recordamos que la producción de café y cacao es producción de exportación y está subvencionada por el Estado, mientras que los otros cultivos no gozan de otra protección que la arancelaria, podríamos concluir que los cultivos varios debían ser preferidos. Por otra parte, al referirnos a las "medianerías" hicimos notar que en las plantaciones no se requiere mano de obra todo el año, que sólo en las cosechas, y ello en un número reducido de días, es cuando hay urgencia de peones. Por el contrario, los cultivos varios requieren mayor número de jornadas diarias de trabajo y por consiguiente, ocupan gran cantidad de campesinos. El costo de producción en esos cultivos necesariamente debe resultar superior al del café y cacao, pero ello implica una mayor participación, por razón de los salarios, del campesinado sin tierras en el producto de las ventas, lo que es muy beneficioso para la economía agraria y para la economía nacional en general.

Otra consideración es que los cultivos varios, bajo el punto de vista económico, reclaman la inversión de capital en la tierra, acondicionamiento de riegos, empleo de maquinarias, aunque rudimentarias, todo lo cual introduce en el campo relaciones de producción más progresistas que las que hemos observado en el cultivo de plantaciones.

De los 2.341.902 hectáreas en propiedad privada, corresponden a la cría 863.705, estando acaparadas por 499 propietarios 781.670, el 90% y 82.040, el 10%, por 2.076 propietarios. En su mayor parte esas tierras estaban antes dedicadas al cultivo y fueron convertidas en potreros de ceba,

para especular con los ganados traídos de los Llanos. Esta transformación ha implicado el desalojo en forma violenta de los campesinos pisatarios. Los Valles del Tuy que por tradición eran el granero del Distrito Federal, han sufrido esa transformación con todas las consecuencias para sus moradores y para el suministro de productos alimenticios al Distrito Federal.

La transformación de las tierras de cultivo en tierras de cría, prueba más aún la tendencia de los actuales acaparadores de la tierra de contraponer ambas formas de cultivo. Para ellos se siembra o se tienen potreros. El sistema completo de producción, la coordinación de la cría y de la agricultura, incluso como medio para un aumento de la renta por la diversificación de la producción y el reparto de los gastos, no ha llegado a plantearse, lo cual es lógica consecuencia de la actitud del latifundista que persigue la explotación del hombre, extraerle una renta, y en nada se preocupa de la tierra como fuente de producción de artículos de subsistencia, para satisfacer necesidades inaplazables de la población.

De todo lo expuesto se desprende una conclusión categórica: las contradicciones inherentes al régimen capitalista, las contradicciones entre la ciudad y el campo, se han agudizado en nuestro país en perjuicio de la mayoría de la población, por la pervivencia de las formas de acaparamiento latifundista de la tierra y por las formas de producción correspondientes. Esas contradicciones tienden a agravarse y a convertirse en causas, a su vez, de la desnutrición de la población, en obstáculo para el desarrollo industrial, en peso muerto para la integración de la nacionalidad. No exageramos. Ya antes de la muerte de Gómez, quien llevó el proceso de acaparamiento a sus extremos límites y con sus persecuciones políticas, provocó el aniquilamiento de regiones antes prósperas, se sintieron los síntomas de esta crisis. Las primas de exportación y la fundación del Banco Agrícola no

tuvieron otro objetivo que ir en ayuda de sus áulicos hacendados, amenazados de ruina. A la muerte de Gómez, los elementos del gobierno López Contreras que percibían el problema, intentaron algunas reformas con la timidez del caso, dada su propia visión. Se introdujeron reformas en la Constitución Nacional y en la Ley de Tierras Baldías, se creó el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, se desarrolló un plan de Cajas Rurales, se amplió el radio de acción del Banco Agrícola, se organizaron "colonias". Sin embargo, todo ello, por la forma como fué planteado y por la forma como ha sido realizado, no ha dado resultados en absoluto. En ciertos aspectos esas medidas han venido a confirmar que cuando se trata de solucionar graves problemas sociales y económicos con medias tintas, esas medidas —aún en los casos de no ser usadas por demagogia— terminan por convertirse en fuentes de despilfarro y de corrupción.

Las colonias, entre ellas "Guayabita", en el Estado Aragua, que conocemos por ser apoderado legal, en unión del doctor Carlos Irazábal, de varios de sus colonos, no han contribuido ni siquiera como ensayos, a la solución del problema agrario. Se han parcelado algunas hectáreas de tierra, pero la administración ha caído en tal forma bajo la red de la burocracia, que la Nación ha despilfarrado cuantiosas sumas para provecho de unos pocos y para justificar la existencia de organismos inoperantes. Administradores, técnicos, jugosos sueldos y sobre las parcelas unos colonos en la miseria, desesperados por trabajar la tierra, impotentes ante el papeleo.

Si a esa parcelación se refiere nuestro apreciado amigo Manuel F. Rugeles cuando se pronuncia con tanta vehemencia —"El Universal" 22 de enero— contra el fraccionamiento de los latifundios, tiene razón. Pero la parcelación no es ni la causa del desastre de esas "colonias" ni tampoco una medida ruinosa, antieconómica. El fraccionamiento de la-

tifundios crea nuevas formas de producción y la manera de fraccionar, es lo que puede dar lugar a perspectivas equivocadas. Que la parcelación de ejidos realizada hasta ahora en México, se haya demostrado insuficiente para la incorporación a la producción agrícola nacional de toda la gran masa campesina, ello no es argumento en contra de la parcelación. Por el contrario, debido a la parcelación de 31.000.000 de hectáreas, se han incorporado a la producción 1.837.798 trabajadores de la tierra, de los 4.000.000 censados, determinando el creciente progreso nacional del valeroso país hermano.

La parcelación no está, por otra parte, en contradicción con el cultivo mecanizado de grandes extensiones de tierra; es un medio para incrementarlo en beneficio de las mayorías campesinas y por consiguiente, de la economía nacional. Los campesinos en posesión de sus parcelas, disponiendo de créditos a largos plazos, voluntariamente organizarán cooperativas de producción para realizar en común las labores de sus parcelas y adquirir colectivamente maquinarias y semillas. Quien haya intimado con campesinos lo sabe de sobra. Y esas grandes explotaciones de producción agrícola, organizadas colectivamente, se desarrollarán más prósperas que las explotaciones extensivas de propiedad individual, porque en ellas estarán ausentes los vicios del régimen capitalista, la explotación de los trabajadores agrícolas por los propietarios de tierras.

En diciembre de 1942 tuvo lugar en esta ciudad la Primera Convención Nacional de Agricultores y en ella, Rodolfo Rojas, Ministro de Agricultura para esa fecha, habló del problema agrario: "Me refiero a aquél que afecta las relaciones entre el propietario y el pisatario. En esta materia se impone un amplio espíritu de justicia. El mero derecho de propiedad no justifica ciertos procedimientos que están reñidos con los dictados elementales de equidad... Acaparar tierras planas, fértiles y bien situadas para mantener-

Las ociosas es algo que reprueba la conciencia colectiva de nuestro pueblo y que reprueba la conciencia colectiva de buen agricultor venezolano”.

El ex Ministro de Agricultura Rojas constataba un hecho —el acaparamiento de las más fértiles tierras, de las mejor situadas, mantenidas ociosas por sus propietarios— que denunció desde su alto cargo. En el Congreso Nacional, en sus sesiones ordinarias del año pasado, el Presidente de la República se refirió también a la necesidad de emprender una Reforma Agraria. ¿Qué significan esas inquietudes en representantes del Ejecutivo Federal? Significan que las relaciones de producción en el campo han llegado a un grado tal de explotación del campesino por el propietario de la tierra, que amenazan a un tiempo la producción agraria y la vida misma del país; que se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de la economía nacional.

Para los que hacemos esfuerzos por interpretar el desarrollo de las sociedades y en este caso, la venezolana, guiados por el método marxista y hemos dedicado y dedicamos nuestra vida a la lucha por un mundo mejor para la humanidad, sin explotadores ni explotados, con iguales posibilidades de trabajo y de bienestar para todos los hombres, hemos llegado a la conclusión ya no teórica, sino cimentada en el portentoso desarrollo moral, social, económico y político de la Unión Soviética, de que el origen de todos estos problemas que aquí se confrontan, como en los demás países capitalistas sea cual fuere su grado de desarrollo, es la propiedad privada de los medios de producción. Pero también, como marxistas, sabemos que el paso de las formas de producción basadas en la propiedad privada a las formas de producción basadas en la propiedad colectiva, socializada, de los medios de producción, implica una revolución que no tiene lugar a fuerzas de descos, sino en el momento en que históricamente concurren las condiciones que la auspician. (1).

En Venezuela, en el momento presente, no concurren esas condiciones. Se plantea la eliminación de las trabas feudales que se oponen al desarrollo progresista, al desenvolvimiento de la economía nacional. Y es por ello que no presentemos ante ustedes una solución revolucionaria. Creemos que es factible y consecuente —en beneficio de la masa campesina y de la naciente burguesía nacional, así como del proletariado que robustecerá sus fuerzas en una economía nacional próspera— es factible y consecuente, repetimos, comenzar a transformar el agro venezolano por medio de una Reforma. Nos encontramos en similar situación a la de otros países en los que redistribuir la tierra, es condición implícita para el incremento del desarrollo de las formas de producción capitalista en el campo, para la aplicación de métodos técnicos de trabajo, extensión de créditos, elevación del standard de vida de la mayoría de la población, creación del mercado interior para la industria; en fin, para la planificación de la economía nacional. (2).

Esa Reforma la concebimos en los cuatro aspectos esenciales siguientes:

1.—La Reforma Agraria debe tener una finalidad precisa:

Como puede desprenderse de las consideraciones generales que hemos expuesto, entendemos que la finalidad precisa que debe inspirar a la Reforma Agraria, debe ser la de aumentar —en calidad y cantidad— los medios de subsistencia del hombre venezolano, por el desarrollo lo más amplio posible de la producción agrícola y pecuaria. Para

(1) y (2): Estos dos párrafos fueron objetados por el Censor de Radio, so-pretexto que en ellos se hacía propaganda marxista. Nos sometimos a esa censura ya que lo esencial, el texto de la Conferencia, llegaría por radio a los millares de locutores interesados en conocer las diversas opiniones que sobre Reforma Agraria se están emitiendo.

Perseguíamos, al escribir esos párrafos, concretar una aclaración que creíamos y creemos necesaria, cual es, de que la Reforma Agraria que se plantea no es una medida socialista. Queríamos anticipar un mentís a todos aquellos que para combatirla y atacar al Gobierno que se propone realizarla, la calificarán adrede de tal con el fin de sembrar la confusión y el temor. Es un arma que ya se ha esgrimido en otros países y que ha sido usada en el nuestro por el Dr. P. M. Arcaya.

El Censor de Radio no lo entendió así. La reacción le estará agradecida.

elo, entrega gratuita de la tierra necesaria a cada campesino para el sostenimiento de él y de su familia, entendiéndose por necesaria, la que pueda trabajar por sí mismo y sus familiares; entrega de implementos de trabajo y otorgamiento de créditos baratos a largos plazos.

Para la entrega de la tierra a los campesinos, el Estado expropiará las tierras que fueren necesarias hasta el límite de 150 hectáreas a que tendrá derecho de conservar el propietario si las tiene en cultivo. Indemnización a los expropiados con cupones de Deuda Pública Agraria, la cual devengará el interés y será recogida por el Estado, en la forma acostumbrada con cualquier otra deuda interna.

La entrega de la tierra debe llevarse a cabo con vista a la organización de concentraciones de población agrícola, tomando como puntos iniciales de ellas, los lugares actualmente poblados.

Organización en cada concentración de Cooperativas de Consumo, con la finalidad de desarrollar el intercambio organizado entre las concentraciones y entre éstas y las ciudades, para el abastecimiento y colocación de productos, suprimiendo a los intermediarios especuladores.

Organización en cada concentración de una agencia del Banco Agrícola, para el funcionamiento de los créditos, pignoración de productos, administración de silos, etc. Creación por ese Banco de Estaciones de Máquinas para el alquiler de las mismas, a bajo precios, a los campesinos que las soliciten.

En forma voluntaria y tomando en cuenta la calidad de los suelos y clases de riegos, creación de Cooperativas de Producción Agrícola para la explotación colectiva de las parcelas de sus miembros.

Venta a los campesinos a los mejores precios, de vacas y ganado en general, así como animales de labor, con el fin de facilitar e incrementar el auge de los sistemas

completos de producción y garantizar una dieta más eficiente a la población.

Suministro gratuito a los campesinos de los consejos técnicos necesarios; venta de semillas seleccionadas; préstamo de sementales de razas adaptadas; ayuda para el mejor aprovechamiento del desarrollo técnico y científico que la agricultura ha alcanzado en otros países; selección de suelos.

Construcción de los sistemas de pequeños y grandes riegos. Dotación de agua potable y de urbanización adecuada a cada concentración.

Dotación de escuela y de unidad sanitaria a cada concentración de población agrícola.

II.—La Reforma Agraria debe contener todo el ordenamiento legal necesario que conduzca a su finalidad.

Consecuentemente con la finalidad de la Reforma Agraria, el Inciso 2 del Art. 32 de la Constitución de la República debe ser reformado en el sentido de que... “el mero derecho de propiedad no justifique acaparar tierras planas, fértiles, bien situadas para mantenerlas ociosas...”, es decir, que el concepto de propiedad debe ser ampliado en consonancia con el mismo desarrollo que ha sufrido el país y que se intenta incrementar; las necesidades colectivas deben privar sobre las individuales y la Nación debe recuperar su derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación.

En 1936 se reformó el mencionado Inciso imprimiéndole, con relación a la Constitución de 1931, una tendencia

a considerar el derecho de propiedad en función de interés nacional, dice así: "...La Ley puede, por razón de interés nacional, establecer restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza o por su condición, o por su situación en el territorio. La Nación favorecerá la conservación y difusión de la mediana y de la pequeña propiedad rural; y podrá, mediante los trámites legales y previa indemnización, expropiar tierras no explotadas de dominio privado, para dividir las o para enajenarlas en las condiciones que fije la Ley..." Sin embargo, el haber introducido los términos "NO EXPLORADAS", determinó que la reforma quedara nugatoria. En efecto, un pequeño conuco, un chivo en un fundo de 1.000 hectáreas, por ejemplo, es suficiente motivo para objetar legalmente la expropiación. Y así se ha interpretado, según informes en nuestro poder, por el Ministerio de Agricultura y Cría ante el requerimiento de grupos de campesinos, a quienes el propietario de la tierra que ellos cultivaban desde hacía decenas de años, había intimado el desalojo violento.

El Inciso 2 del Art. 32 deberá quedar redactado con toda claridad en el sentido de autorizar a la Ley no sólo a establecer restricciones y prohibiciones para la adquisición y transferencia de la propiedad sobre la tierra, sino de limitar la extensión de la tierra apropiable; determinar el régimen de las aguas; establecer el derecho para los núcleos de población a que se les dote de la tierra necesaria para su subsistencia, tomándola de las propiedades inmediatas, de acuerdo a las medidas que se establezcan para el fraccionamiento de los latifundios. Se deberá establecer el derecho de los pueblos a reivindicar los Ejidos de que fueron despojados y a ser dotados de éstos, aquéllos que con anterioridad no los hubieron poseído. En relación a la indemnización por expropiación, deberá establecerse que no se cubrirá en forma previa ni mediante juicio contradictorio. Al efecto se establecerá un procedimiento expeditivo para la expropiación y la forma en que se pagará la indemnización.

La Ley interpretativa de este Inciso, la Ley Agraria, especificará los detalles, la organización de los centros de población agrícola, el o los organismos encargados de llevar a la práctica la Reforma; la forma en que serán afectados los Bienes Nacionales; la inalienabilidad de las tierras de Ejidos y de las parcelas dotadas, etc.

Tanto la Ley de Expropiación como la de Bosques y Aguas, la de Tierras Baldías, la de Colonización y la del Banco Agrícola y Pecuario, deberán ser reformadas para su debida concordancia con la Constitución y la Ley Agraria.

Por si alguna persona fuere inducida a creer que estas proposiciones plantean una reforma de tendencias socialistas, debemos advertir que la forma de organización socialista de la sociedad entraña la abolición de la propiedad privada sobre todos los medios de producción, incluso la tierra, medios de producción que deben retornar a la colectividad para ser explotados y aprovechados por ésta en bien común de todos. El que confunda la redistribución de la tierra, como medio de incrementar el standard de vida de la población en general, con el socialismo, peca de ignorante o de disimulado defensor del régimen latifundista.

III.—La Reforma Agraria debe ser dirigida por un organismo especialmente creado, como Departamento Autónomo del Ejecutivo Federal:

Es fácil deducir que para llevar a la práctica la Reforma Agraria, se precisa de un organismo federal especial, con jurisdicción en los Estados y Territorios, con la participación de éstos por medio de delegaciones. Este organismo o Departamento deberá depender directamente del Presidente de la República, ya que el Ministerio de Agricultura y Cría tiene por función el fomento de la agricultura en general.

Entre sus atribuciones este Departamento tendrá la de llevar el Registro Agrario Nacional para la tramitación de todos los expedientes de dotaciones de tierra, solicitudes, etc.

democracia enraíce y prospere y pueda resistir las acechanzas de sus enemigos todavía poderosos. Todos los que, en una palabra, luchan por la independencia económica de Venezuela, premisa indispensable a su independencia política.

Ese carácter nacional de la reforma todavía no ha sido comprendido a cabalidad. Gentes hay, —y me refiero únicamente a los que de buena fé lo sustentan porque a los otros no se convencerá nunca—, que miran con desconfianza la reforma y la temen y combaten, sin comprender que el progreso social está ligado al régimen de propiedad de la tierra.

Cuando ese régimen es como el nuestro —semi-feudal, latifundista, dentro del cual priva el empirismo agrícola, la ociosidad de la riqueza territorial y la desmedida explotación de la masa rural—, la sociedad o retrocede, o se estanca o marcha muy lentamente. Ello es debido a que tal sistema de propiedad territorial, por esencia, por entrañable imperativo, al mantener en servidumbre, al ras de lo vegetativo, a la población campesina, sustrae del proceso de la existencia creadora en sus más variados aspectos tanto a una fuente de producción muy importante, —la tierra—, como a los hombres que en ella y de ella trabajan y viven.

Cuando, por el contrario, el sistema de propiedad de la tierra se acomoda a las exigencias del progreso, la actividad humana, individual y colectiva, encuentra propio cauce y terreno fecundo para sus más vigorosas creaciones.

Adecuada es la hora para estos estudios serenos, responsables; redactados con el propósito de aclarar conceptos, de combatir propagandas tendenciosas y reaccionarias, de orientar a un pueblo y de apoyar el propósito constructivo del Gobierno de iniciar la reforma agraria.

Están esas finalidades presentes en la conferencia de Salvador de la Plaza, acérrimo enemigo del exhibicionismo, sin el más remoto afán de singularizarse y quien sólo tiene por norma en su cotidiana actividad, el ser útil a la masa laboriosa que, a pesar de su ignorancia y su miseria, busca apasionadamente la felicidad y la luz.

CARLOS IRAZABAL.

IV.—La Reforma Agraria debe ser realizada con la participación activa de los campesinos y apoyada en la coordinación estrecha de las fuerzas progresistas de la Nación con el Gobierno. Las tuerzas reaccionarias, latifundistas, que en nuestro país aún no han sido debilitadas, opondrán una tenaz resistencia y en cada lugar será necesario vencerlas:

La Reforma Agraria implica realizar una transformación en las actuales relaciones de producción en el campo y por consiguiente, se presentarán a solución infinidad de problemas que el Ejecutivo no podría resolver sin el concurso activo de los más interesados en la Reforma: los mismos campesinos. Los Delegados del Departamento Agrario, sus funcionarios: agrónomos, ingenieros, agentes del Banco Agrícola, etc., harán los estudios y elaborarán los planes locales, pero quienes realizarán las labores de constitución de pueblos, saneamiento, preparación de tierras, etc., no podrán ser otros que los campesinos organizados. En nuestra propia Historia y en la otros países, existen ejemplos elocuentes de la facultad creadora que se desarrolla en los trabajadores organizados. Y esa facultad debe ser aprovechada sin miedos, sin titubeos.

No olvidamos el atraso y la miseria en que vive el campesino venezolano, la ausencia de vías de comunicación, los obstáculos que la misma naturaleza, tan especialmente dominada aún por el hombre venezolano, opondrán a la Reforma. Tampoco la resistencia de los latifundistas, especuladores, de todos aquellos que viven de la explotación del campesino, a cualquier medida que se traduzca en limitación de los privilegios sociales y políticos de que han venido disfrutando y en perjuicio de los intereses económicos, sobre los cuales aquellos privilegios se asientan. En México hemos asistido a ese proceso y no nos ha sorprendido como hasta nuestro país han llegado las falsas informaciones y las calumnias esparcidas por latifundistas, sinarquistas y falangistas, para, desacreditando la Reforma Agraria, oponerse a ella y

terpedearla. Pero, el ejemplo de ese gran pueblo, sus realizaciones, su progreso, el aprovechamiento de las grandes dotes de trabajo y organización de la población indígena incorporada a la vida nacional; su voluntad de ser grande y definitivamente libre, nos llena de optimismo. Confiamos en el pueblo, en el pueblo trabajador, en ese mismo pueblo que trasmontó los Andes para llevar la libertad a otras tierras y que durante el siglo de tiranías que hemos sufrido, muriendo de hambre, sufriendo persecuciones políticas en los campos y en las ciudades, ha mantenido viva la tradición de libertad y la resolución de construir un país próspero e independiente.

Una Reforma Agraria que no se dirija al pueblo trabajador y no cuente con su cooperación activa y decidida, será un conjunto más de articulados muertos, de declaraciones presuntuosas, que agregar a los legajos de literatura oficial que sirven de alimento a la polilla en los archivos nacionales.

EDITORIAL NEVERI

Pedreira a Marcos Parra, 30. — Caracas.

SALVADOR DE LA PLAZA.

LA REFORMA AGRARIA: ELEMENTO BASICO DE PLANIFICACION DE LA ECONOMIA NACIONAL

En 1940 visitó nuestro país una misión americana integrada por los técnicos Manuel Fox, James J. Edwards, Martin Krost, Haroldo R. Spiegel y Haroldo Van V. Fay. Después de realizar estudios minuciosos, la Misión concretó esta conclusión:

“Venezuela tiene riquezas naturales magníficas que aún no han sido desarrolladas enteramente. La situación es única en su género, visto que Venezuela tiene probablemente los más altos ingresos gubernamentales “per-cápita” en el mundo, sin deuda externa y casi ninguna deuda interna. Sus nacionales, sin embargo, son pobres y los efectos de la pobreza se manifiestan en todas partes”.

Es razonable que cuando nuestro país figura como el segundo exportador de petróleo en el mundo y, en tercer lugar como productor, la consecuencia lógica que venga a la mente de quien se interese por conocer su situación, sea la de considerar a su pueblo colectivamente rico, gozando

de un bienestar más o menos distribuido en su población. Pero siendo la realidad otra, necesariamente debía ella causar una angustiosa extrañeza en los señores de la Misión. En efecto, les fué suficiente visitar los mercados de la capital y otras ciudades, salir unos pocos kilómetros más allá del Distrito Federal, analizar los costos de vida, para observar que esa renta "per-cápita" se invertía en sostener el alto standard de vida de una reducida minoría de la población en perjuicio de la gran mayoría; se traducía en una pobreza colectiva cuyo exponente más gráfico era la balanza comercial con saldo en contra al país de 281 millones de bolívares, año 1939-40, porque ese saldo desfavorable indicaba que por ser insuficiente nuestra producción agrícola para alimentar a la población, el país tenía que importar artículos de subsistencia y que por haber continuado descendiendo en calidad y cantidad nuestras exportaciones naturales, la situación económica de la población campesina se había agravado con la consiguiente reducción del mercado interior y la progresiva paralización de las actividades productivas, creativas individuales.

A medida que nuestras exportaciones fueron descendiendo y al mismo tiempo aumentando nuestras importaciones, el déficit de la balanza de pagos se cubrió con las importaciones de dólares que las compañías petroleras efectuaban para pagar sus gastos de administración, diversos impuestos, salarios, etc. Absorbiendo los ingresos del Estado —directos e indirectos— la mayor parte de esa importación de divisas, necesariamente la economía nacional tenía que degenerar en lo que podríamos llamar economía presupuestaria, parasitaria, por venir a ser en definitiva esos ingresos del Estado, en su distribución y redistribución, las principales fuentes del enriquecimiento personal. Por otra parte, por depender el presupuesto del Estado y la economía del país, de las alteraciones que pudieran sufrir esas importaciones de divisas extranjeras, es fácil darse cuenta de los riesgos a que se encuentra expuesta nuestra soberanía de país libre.

Muy otra sería la situación si nuestras importaciones fueran pagadas con exportaciones propias. Alberto Adriani sintetizó en pocas palabras esta peligrosa situación: "Sembramos el Petróleo", pidió. Es decir: produzcamos lo necesario para nuestra subsistencia, mejoremos nuestros productos de exportación en calidad y cantidad, adquiramos menos artículos de lujo, para que las rentas del petróleo dejen de ser un peligro para la independencia de Venezuela y se queden en el país contribuyendo a la acumulación de capital nacional, humano y material, sin la cual el desarrollo de la industria y el incremento de la agricultura son imposibles de lograr. Una investigación minuciosa nos llevaría a conocer en términos bastante precisos el volumen de capital que se hubiera podido acumular desde que las compañías extranjeras explotan nuestros yacimientos petrolíferos, cifra que aparecería fabulosa dada nuestra reducida población y suficiente para haber acondicionado el medio al desarrollo de la economía nacional.

Pero sería un error afirmar, como lo han pretendido algunos, que el saldo desfavorable de la balanza comercial se debe exclusivamente a la explotación petrolera. Como país semicolonial, el nuestro sufre en su desarrollo económico todas las desfiguraciones que le imprime su convivencia con países imperialistas. Por fuerza de esa convivencia y de la consiguiente supeditación, nuestra estructura económica, en términos generales, gira alrededor de la extracción de materias primas para su elaboración en los países imperialistas y concomitantemente, como mercado para los productos elaborados en esos países y de colocación para su capital financiero.

Varias y funestas son las consecuencias de esta supeditación. El fenómeno de que el déficit de la balanza de pagos se cubra con las divisas extranjeras importadas, quiere decir que la menguada participación de Venezuela en la extracción de su riqueza petrolera escapa al exterior,

regresa al país originario de la compañía, en forma tanto más ruinosa cuanto menor sea el porcentaje de maquinarias que importemos. El desarrollo técnico de los países imperialistas les permite ofrecer en nuestro mercado artículos elaborados a precios inferiores a los de costo de los similares de industria nacional. Para alimentar la industria nacional se recurre a las medidas de proteccionismo arancelario, pero ello en definitiva se traduce en una elevación del costo de la vida y la consiguiente reducción del mercado. Y si ese fenómeno se produce en nuestro propio mercado interno, con mayor razón ocurrirá en los mercados exteriores, descartando la perspectiva de una producción industrial y agrícola masiva para la exportación. El desigual desarrollo capitalista de los países se expresa para los nuestros, atrasados, en una dependencia creciente con respecto a los más desarrollados, en una deformación del desarrollo normal de nuestras economías, en una limitación del incremento industrial y agrícola para satisfacer las necesidades de subsistencia y de elaboración de nuestras materias primas.

Pero siendo esto tan cierto, no explica el por qué nos veamos forzados a importar artículos alimenticios necesarios para la subsistencia de la población en general, que podrían ser producidos en nuestro propio país. La explicación podemos encontrarla en la estructura de nuestra producción agraria, la cual se ha formado después de un largo y penoso proceso. Para ser más claros, diremos que si la dependencia de nuestra economía a la de los países imperialistas se expresa en forma tan aguda, ruinosa y lamentable para la población venezolana, ello es debido fundamentalmente a las condiciones que imperan en el campo venezolano.

Heredamos de la Colonia, al constituirnos en república independiente, una organización económica agraria —plantaciones y cría— basada en grandes extensiones de tierra acaparadas en pocas manos, en el trabajo de esclavos y en

la exportación de frutos. La producción para el mercado interno era accesoria. Al propietario de la tierra no le interesaba explotarla para su subsistencia directa, lo que perseguía era aumentar su renta, esquilmando al esclavo y al pisatario.

Libertados los esclavos —1854—, los propietarios de las grandes extensiones de tierra y por consiguiente, de las plantaciones de cacao, café, añil, principales cultivos de exportación, sustituyeron la mano de obra esclava por la no menos en servidumbre mano de obra del medianero, del peon pagado en especies o con fichas sólo cambiables en la pulpería del fundo. Dado que las plantaciones a diferencia de los cultivos de sembradío —cereales, leguminosas, etc.— no requieren trabajadores constantes, estables, durante todo el año, sino en la época de las cosechas, se desarrolló el sistema de “medianerías” con el fin de fijar en el fundo a la población agrícola necesaria. Medianeros y peones, libertos y manumisos, eran ahora hombres libres jurídicamente, pero que por carecer de tierra para producir sus alimentos tuvieron que vender su trabajo al propietario de la tierra, única manera de no perecer de hambre. Además, el sistema de medianerías permitía al propietario del fundo, a un costo mínimo, aumentar el número de las matas y la misma extensión de sus tierras. La medianería es un contrato por medio del cual el propietario de la tierra entrega al campesino un lote de ella, generalmente en las partes montañosas o en los linderos del fundo, para que lo siembre, a condición de que le entregue la mitad de las matas al llegar al estado de producción y le venda la otra mitad al primer requerimiento. Ahora bien, para realizar ese cultivo, el medianero tiene que comenzar por talar la montaña, hacer los almácigos del fruto, sembrar la “sombra”, lo que requiere tiempo durante el cual tiene que cubrir sus gastos de subsistencia. El medianero trabaja al mismo tiempo como peon, pero como el salario no le es suficiente para vivir, recurre al propietario de la tierra en solicitud de anticipos,

diando en garantía las matas de su proyectada medianería. Y de esta manera fué reemplazada en nuestros campos y en nuestra producción agrícola la mano de obra esclava — sobre la cual tenía derecho de propiedad el propietario de la tierra y obligación de alimentarla porque si de hambre moría perdía su esclavo — por la mano de obra del medianero y del peón, ligada a aquél a través de un nuevo lazo de encadenamiento que le garantizaba un trabajo servil sin la obligación de alimentar al trabajador.

Las ventajas que este sistema de servidumbre representó para el propietario, se tradujeron en cierto desarrollo de las plantaciones y por consiguiente, de las exportaciones de frutos. Así también, del catastro de tierras en el país, cuando se lleve a cabo, aparecerá que los actuales fundos de café y cacao deben la extensión de sus tierras y el número de sus matas, a la incorporación de las “medianerías” en pago de deudas y a la anexión de tierras baldías que ni siquiera fueron acusadas.

Una producción agrícola de base tan atrasada, necesariamente debía conducir a una crisis especial que se dejó sentir desde principios de 1900. El campesino, el hombre sin tierra, paulatinamente fué internándose en las montañas, escasearon las familias fijadas en los fundos y por consiguiente, los brazos baratos para las cosechas. Esto significó aumento de costo en la producción, abandono del cuidado de las matas, demérito de la calidad de los frutos.

Coincide esta situación con la absorción de brazos por la industria petrolera y con la concurrencia en los mercados internacionales, de la producción de café y cacao de otros países, de mejor calidad unos, los más a precios inferiores. Actualmente el café y el cacao, por las cotizaciones de los mercados internacionales, no cubren sus costos de producción y si se continúa exportándolos, es gracias a la subvención del Estado: prima de exportación primero y ahora sistema de dólar-fruto.